

---

# Incumplimiento del deber de reserva por concejal

*Ayuntamiento de Galapagar*

## DECRETO DE LA ALCALDÍA

X, alcalde presidente del ayuntamiento, dictó esta resolución con base en los siguientes antecedentes y consideraciones legales:

1. En el expediente X relativo a la concesión de una licencia de actividad en el local situado en X, el Sr. X presentó el día X de X de X un recurso de reposición acompañado de diversos documentos. Entre ellos, como documento número X presenta una fotocopia de un informe jurídico del TAG, fechado en X, emitido en el expediente (folios X del expediente) y como documento número X una fotocopia de la propuesta de resolución, diligenciada tras la aprobación en la Junta de Gobierno (folios X del expediente). También presenta con el recurso de reposición una fotocopia del dictamen emitido por el Letrado Consistorial. Todos estos documentos son internos y no consta que fueran objeto de notificación o entrega al Sr. X.

2. En las fotocopias presentadas como documentos X es visible un sello que deja constancia de la entrega de la fotocopia del documento, pero el destinatario de la misma aparece en blanco, sin poder saber a quién fueron entregadas, pues se trata de una fotocopia de unos folios en los que previamente se había ocultado este dato. Sin embargo varios folios de los que forman este documento no son fotocopias de un documento previamente tratado para ocultar el nombre de la persona a quien habían sido entregados, sino que muestran el producto aplicado para tapar el nombre del destinatario. Se trata de los folios X. Observados a contraluz, en estos documentos es claramente visible escrito a mano «X», concejal de este ayuntamiento.

3. Ante estos hechos, por providencia de esta Alcaldía de fecha X de X se incoó un procedimiento por posible incumplimiento por parte del concejal X del deber de reserva impuesto a los concejales por el art. 16 del Reglamento de organización de las entidades locales de 1986 (Real Decreto 2568/1986).

4. Esta providencia se dictó ante la constatación de que en el expediente X relativo a la concesión de una licencia de actividad en un local situado en X el Sr. X acompañó su escrito de recurso de reposición (presentado el X) de unas fotocopias de documentos del expediente en los que se veía un sello de entrega de la fotocopia en el que el nombre de la persona a quien había sido entregada estaba borrado, salvo en unas concretas hojas

en las que sobre el sello se había tratado de ocultar el nombre del receptor mediante un producto, pero que visto al contraluz mostraba claramente el nombre del Sr. X.

5. El Sr. X presentó un escrito de alegaciones en el que pide que se archive el expediente, por las razones que deja expuestas.

6. Ante las alegaciones del Sr. concejal la Alcaldía debe señalar lo siguiente, a la vista de los documentos del expediente:

a) Pide el Sr. X que se pregunte al Sr. X sobre estos hechos, apelando a la condición de buen vecino de éste. No es necesario preguntar, pues el Sr. X, con su desliz al presentar documentos sin reparar en que delataban su procedencia, ya manifestó lo necesario. Además, no consta que haya accedido al expediente ni que haya abonado la tasa por reproducción de documentos, y todo ello, junto con el intento de borrar el nombre del receptor, deja en evidencia que era consciente de la irregularidad de su proceder, sin olvidar que no abonó las tasas, un hecho que debe ser destacado cuando, como es el caso, se trata de un ex concejal de la Corporación.

b) Sobre las supuestas vulneraciones de su derecho a la información y a que el hecho de que el Sr. X dispusiera de los documentos revela que es una cuestión personal hacia él, sólo hay que recordar por el Decreto de la Alcaldía de X (número X) se declaró la caducidad de un derecho de acceso a un expediente que había solicitado el Sr. X y que había sido autorizado por la Alcaldía, pues tras ser notificado no acudió a examinarlo en las dependencias municipales, lo que constituye un abuso de derecho, como así fue declarado y censurado al Sr. Concejal por esta Alcaldía en el Pleno, sin que el Sr. X manifestara la menor objeción a ello, admitiendo por tanto esta realidad. Por lo demás, el resto de alegaciones del Sr. Concejal carecen de fundamento.

c) Sobre la imposibilidad de sanción, con ello reconoce el Sr. X la irregularidad de su comportamiento y apela a la falta de tipificación de la conducta para eludir una sanción. Esta cuestión será analizada, pero no impide declarar el incumplimiento del deber y censurar una conducta impropia de un concejal.

7. Por consiguiente hay que considerar probado que el Sr. X facilitó al Sr. X una fotocopia de documentos del expediente, que había obtenido en su condición de concejal, que posteriormente aquel adjuntó con un escrito dirigido al ayuntamiento, tratando de ocultar la procedencia.

8. En el momento en que se presentó este recurso el Sr. X era concejal delegado, con competencia sobre la concesión de licencia de actividad para restaurante, y por tanto sobre el expediente administrativo.

9. Por otra parte, es notorio que entre el concejal X y X existen mutuos intereses, ya que se presentaron en la misma lista electoral en las elecciones y presentaron numerosos escritos conjuntos.

10. Estos hechos han podido ser constatados con motivo de la interposición, entre otros por parte del Sr. X, de un recurso contencioso administrativo, ya que se ha debido de fotocopiar el expediente para su remisión al Juzgado.

11. De los antecedentes obrantes se desprende por tanto que el concejal Sr. X ha filtrado a un particular varios documentos oficiales que forman parte de un expediente, cuyo contenido no tiene la consideración de público.

16. El intento, burdo, de ocultar la procedencia de los documentos X y X presentados con el recurso de reposición ha quedado en evidencia gracias al desliz cometido, pues se presentaron documentos que permiten constatar que habían sido entregados al Sr. X. Esta misma intención de ocultar la procedencia de los documentos pone de manifiesto, por una parte que la persona que los presentó no los había obtenido legítimamente, y por otra que era consciente de que la forma de acceder a ellos era irregular.

13. La alegación del Sr. X de que los documentos los había obtenido el Sr. X legítimamente queda en evidencia por la propia actitud de éste, al pretender ocultar la procedencia de los escritos y porque no consta que se haya realizado dicha entrega ni que se hayan abonado las tasas por expedición de fotocopias.

14. No es ningún secreto la relación política existente entre los Sres. X y X. Ambos formaron parte de la misma lista electoral y ambos presentaron varios escritos conjuntos. A la vista de estos hechos queda acreditado que entre ambos fluye la información relativa al ayuntamiento, aquella a la que el Sr. X accede en su condición de concejal.

15. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto en anteriores ocasiones sin que ninguno de los afectados negara esta circunstancia. Así, en el expediente sobre alteración de la calificación jurídica de dos parcelas en X, ambos presentaron un escrito de alegaciones conjunto en el que declaraban haber examinado el expediente. En la respuesta a las alegaciones se hizo notar que sólo constaba el acceso al expediente por parte del Sr. X (quien obtuvo copias sin pagar la tasa, por ser concejal) pero no por parte del Sr. X y que por ello el conocimiento del expediente por este último procedía de la información suministrada por el Sr. X. Ninguno de los dos negó esta circunstancia tras serles comunicada la respuesta a sus alegaciones. Por otro lado, en la resolución de las alegaciones por ambos presentadas al reglamento del Registro de documentos del ayuntamiento se hizo constar así mismo que, pese a alegar, no constaba que el Sr. X hubiera examinado el expediente, por lo que el conocimiento del texto debía proceder de la información facilitada por el Sr. X, pues éste, como concejal, obtuvo una fotocopia del texto.

Estos hechos sirven de contexto y ayudan a entender lo ocurrido en el caso del expediente X de licencia de actividad.

16. El art. 16 del Reglamento de organización de 1986 impone a los concejales el deber de guardar reserva sobre las informaciones a las que accedan por su condición de tales y a no reproducir los documentos que se les entreguen. A la vista de los hechos es necesario concluir que el Sr. X incumplió este deber, por lo que la Alcaldía debe ejercer sus funciones de dirección del gobierno y de la administración municipal y por ello debe amonestar y sancionar en su caso, la conculcación del deber de reserva y la indebida filtración de documentos.

17. Las propias alegaciones del Sr. X reconocen implícitamente el hecho de la entrega de esos documentos. Dejada en evidencia la alegación de que el Sr. X obtuviera esas copias de manera legítima, según lo expuesto más arriba, las alegaciones sobre el alcance de los documentos y la imposibilidad de sancionar el comportamiento confirman que efectivamente se ha producido la filtración por su parte, ya que implica un tácito reconocimiento de su proceder irregular y un intento de evitar las consecuencias que se pudieran derivar. Que los documentos sean o no relevantes es lo de menos, pues el incumplimiento del deber existe; si ocurre que los documentos tienen especial valor o fueran confidenciales o con su reproducción se lesionasen derechos de terceros, lo que habría sería una agravación de la conducta, pero el incumplimiento del deber permanecería.

18. La conducta del Sr. X debe ser censurada por la Alcaldía y por ello cabrá tomar prevenciones en el futuro.

19. Por otra parte no se puede desconocer que con su comportamiento el Sr. X ha facilitado al Sr. X copias para cuya obtención hubiera tenido que abonar una tasa, de acuerdo con la ordenanza en vigor, por lo que ha eximido graciosamente a un vecino de la obligación de abonar la tasa, dado que por su condición de concejal la obtención de fotocopias no está sujeta al pago de una tasa. Es decir, la actitud del Sr. X ha sido contraria a los intereses del ayuntamiento, con independencia del importe de la tasa, cuya liquidación se recabará a la Tesorería para poder reclamar el pago al Sr. X, si procede.

20. La imposición o no de una sanción requerirá de un previo estudio jurídico, mas en este caso, la Alcaldía, en ejercicio de las facultades de dirección del gobierno y la administración municipal, debe declarar el incumplimiento del deber establecido por el art. 16 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, y requerir al Sr. concejal que se abstenga de reiterar ese comportamiento.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades que otorgan a la Alcaldía las normas en vigor resuelvo:

1. Se declara el incumplimiento por parte del concejal X del deber de reserva impuesto por el art. 16 del Reglamento de organización de 1986, al haber quedado acreditado que entregó al Sr. X fotocopias de documentos del expediente X, sobre concesión de licencia de actividad en el local situado en X, que aquél presentó junto con el recurso de reposición interpuesto el X, tratando de ocultar el nombre de la persona a la que habían sido entregados. Esta resolución tiene efectos simplemente declarativos, y no implica la imposición de una sanción ni ejercicio de la potestad sancionadora.

2. Se requiere el Sr. X para que en el futuro se abstenga de repetir este comportamiento, con las prevenciones legales consecuentes.

3. Se comunicará al departamento de medio ambiente esta resolución para dejar constancia de su contenido en el expediente X, disponiendo así mismo su comunicación a los servicios jurídicos del ayuntamiento a los efectos que fueran procedentes en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. X contra el acuerdo tomado por

la Junta de Gobierno Local en relación con la licencia concedida para la realización de actividad en el local situado en X.

4. Se ordena a la Tesorería municipal que practique la liquidación por el importe que hubiera correspondido por la tasa por la expedición de copias por la reproducción de los documentos presentados por el Sr. X junto con el recurso de reposición de X, y por los que debería haber abonado una tasa de la que le eximió de facto el Sr. X, por si cupiera requerir al concejal su abono en ejecución de este decreto.

5. Contra esta resolución, podrá el interesado interponer los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo un *recurso de reposición* ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo con lo que dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

b) Directamente contra esta resolución se podrá interponer un *recurso contencioso administrativo* ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Madrid, en el plazo de dos (02) meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA).

En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación que se produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del recurso sin que se tenga recibido la notificación de la resolución correspondiente, el plazo para la presentación del recurso contencioso administrativo será de seis (06) meses, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto de acuerdo con la normativa específica aplicable, según lo dispuesto en el art. 46.1 de la LJCA citada.

Así lo dispongo por esta resolución que firmo en la fecha que consta en el encabezado.

El alcalde presidente